

El terror no puede normalizarse

El ataque con armamento de guerra perpetrado la noche del sábado último en un predio forestal en Victoria, región de La Araucanía, que cobró la vida de un guardia y dejó a otro gravemente herido, es un recordatorio brutal de la crisis que enfrentamos hace demasiado tiempo en la macrozona sur, hechos de los cuales nuestra provincia de Biobío no ha estado exenta.

No hablamos de hechos aislados, sino de una escalada sostenida de violencia que vulnera derechos básicos, destruye la convivencia y siembra el terror entre quienes solo buscan trabajar y vivir en paz.

Desde este mismo espacio hemos insistido en ocasiones previas en que la violencia, venga de donde venga, no puede convertirse en parte del paisaje ni ser aceptada con resignación. Cada ataque, cada muerte, cada familia marcada por una tragedia tan fuerte como la pérdida de un ser querido en el contexto de la denominada "violencia rural", es también un golpe a la democracia y al Estado de Derecho. El silencio o la indiferencia, en este contexto, se convierten en una forma de complicidad que no podemos aceptar.

Por ello, resulta urgente que las autoridades asuman esta situación con la seriedad que merece. No basta con declaraciones de condena ni operativos esporádicos y planes que no logran frenar la espiral de violencia. Se requiere una estrategia integral y sostenida, que combine presencia efectiva de las fuerzas de seguridad, fortalecimiento de la capacidad

investigativa de las policías y de la acción de la justicia, así como medidas que apunten a las causas sociales, económicas y culturales que han permitido que este clima se perpetúe.

Pero también corresponde a la sociedad civil y a las comunidades locales no permanecer pasivas. La construcción de paz y seguridad demanda corresponsabilidad. No podemos dejar que los hechos violentos opaquen los esfuerzos de desarrollo ni que la inseguridad erosione el futuro de nuestra zona sur.

Lo ocurrido en Victoria no es un episodio más: es un nuevo llamado de alerta. Y en época electoral ese llamado debe ser asumido con total claridad. A los parlamentarios que serán elegidos les cabe la responsabilidad de llegar al Congreso con plena conciencia de la gravedad de esta situación y preparados para legislar de mejor forma, sin evasivas ni cálculos partidistas. Y a los candidatos presidenciales les corresponde pronunciarse sin ambigüedades: primero para condenar duramente estos actos de terrorismo y, asimismo, para comprometer propuestas serias y efectivas que devuelvan la seguridad a los territorios.

Honrar a las víctimas implica exigir justicia, pero también demandar compromisos firmes de quienes aspiran a liderar Chile en los próximos años. Nuestro país no puede acostumbrarse a vivir con miedo, y sus futuros gobernantes y legisladores no pueden seguir mirando hacia otro lado frente a una herida abierta en el corazón del sur del país.